

## LO DEJO A SU CRITERIO

Esther ONGAY\*

Hace unos meses, en septiembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró su idea de que la corrupción en México es un asunto cultural. Una declaración así resulta indignante porque parece una salida fácil ante un problema que debería atacar el propio gobierno. ¿Cómo ocuparse de algo que es cultural?, ¿cómo desarraigar del corazón de cada mexicano “la cultura” de “la mordida”? No parece que el argumento cultural llegue muy lejos en el combate a la corrupción. Sin embargo, ¿qué se puede decir cuando efectivamente existe una condescendencia implícita y extendida ante este tema?

Existen ciudadanos ejemplares en México que nunca han cedido a la corrupción, sin duda, pero ¿serán mayoría? En la filosofía política, particularmente entre los contractualistas, existe la noción de que la ley representa un acuerdo social al que se atienen las personas por el bien común y, finalmente, por su propio beneficio. En México, a veces, se entiende la ley como una norma condicional al criterio de cada quien, no como una norma que debe cumplirse justamente porque es la ley. ¿Qué pasa si se considera que las prácticas corruptas caen en la categoría de lo que se puede decidir particularmente?

A pesar de que el tema de la corrupción parece estar de moda, no se observan avances relevantes en el asunto. Así como el tabaquismo era tolerado hace unos años y ahora parece un terrible crimen, la corrupción también se va convirtiendo en un estigma

---

\* Investigadora en el Programa de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa.

social en ciertos círculos. Sin embargo, la situación no mejora visiblemente.

En el metro de la Ciudad de México, diariamente, se pasean vagoneros con todo tipo de mercancías a pesar de que está prohibido. Es poco creíble que las autoridades no lo sepan, por lo que existe una duda razonable sobre la existencia de alguna clase de “arreglo”. Los usuarios lo toleran. Se venden discos pirata y también se compran. Para algunos puede parecer una circunstancia normal, que está bien o que está mal, que reta al sistema económico o que afecta a la sociedad en su conjunto, se sostienen muchas posturas, el hecho es que es una situación cotidiana. No hay escándalo. Para bien o para mal, es así.

Esto se replica a gran escala. Cuando sale a la luz que un alto funcionario se beneficia de su puesto para gozar de una mansión baratísima y en “pagos chiquitos” o que utiliza recursos públicos para darse una vacación, existe cierto revuelo, pero no mucho seguimiento. De algún modo, se soporta —se justifica o se espera— que quien está en una posición de poder lo utilice para su beneficio. Tal vez exista algo de aspiracional en las reacciones de quien no ve lo grave del asunto o es simplemente la costumbre de saber que los recursos públicos son utilizados para beneficios privados.

Es importante resaltar que las implicaciones de la corrupción no son las mismas cuando suceden a ras de suelo que cuando la corrupción se presenta en los altos círculos del poder del país. Desvío de recursos, malas decisiones de gobierno, colaboración de las autoridades civiles con grupos del crimen organizado, de todo hay. Los costos son altísimos. Con los contubernios entre gobernantes y empresarios, en cualquier momento, se construirá un supermercado en la punta de una pirámide. La sociedad mexicana paga. El precio de la corrupción va desde la falta de confianza en los políticos hasta la impunidad por desapariciones y asesinatos.

Las consecuencias de la corrupción abarcan lo económico, lo político y lo social. El problema es como una serpiente que se

muerde la cola. Vale analizar un ejemplo hipotético que, a pesar de ser simplista, puede ser útil para ejemplificar la situación.

La corrupción contribuye a la concentración de la riqueza al conseguir prebendas para las personas que pueden pagarlas. Los “contactos” pueden, por ejemplo, traducirse en facilidades para evadir al fisco. Así, en un esquema de corrupción, es poco probable que se logre una recaudación progresiva, ¿cuál es el costo?

Sin una política fiscal que avance hacia la redistribución económica, será difícil implementar los programas sociales que requiere el país para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, particularmente, de la mitad que vive bajo la línea de pobreza. Aún más difícil si se considera que las decisiones de política pública están muchas veces sesgadas por la propia corrupción. Esto se observa cuando los recursos se dirigen hacia el clientelismo, la compra de votos o los negocios privados de los políticos.

Siguiendo el ejemplo, en un contexto en que la desigualdad es inmensa, existen mexicanos con salarios muy bajos y alguna forma de autoridad. No es una regla, pero existe la posibilidad de que estas personas utilicen el control sobre bienes necesarios para los demás para exigir “mordidas” y verlas como un complemento a su ingreso. ¿Dónde se rompe el círculo vicioso si el común denominador es la impunidad que la propia corrupción genera?

Existen otros ejemplos ambivalentes con respecto a la corrupción. Uno de estos ejemplos es la implementación del alcoholímetro, mecanismo para evitar que los que beben alcohol manejen bajo sus efectos. El bien público que se busca cuidar con esta medida es evidente: prevenir accidentes fatales causados por la irresponsabilidad de quienes no toman provisiones al irse de fiesta y se suben a su coche como si estuvieran en condiciones de conducir. Es común conocer en el Distrito Federal a alguien que haya parado en “el torito”, es decir, en los separos destinados a quienes no pasan la prueba del alcoholímetro. Aparentemente, esta política no se presta a la corrupción. Si el aparato marca exceso de alcohol en su sangre, la persona sufre el castigo. En este caso,

parece que el Estado actúa como debiera. Sin embargo, existen también medios en redes sociales que anuncian los puntos donde se colocan los retenes del sistema para que sea posible evadirlos. ¿Cuál es el punto de quienes alimentan de información las redes sociales para darle la vuelta, literalmente, a un sistema de protección civil que funciona?

Que hay algo de cultural en la corrupción en México, seguramente, pero el mayor problema es institucional. Las instituciones, entendidas no sólo como dependencias u organizaciones sino también como reglas de juego, no están generando los incentivos adecuados para acabar con la corrupción. ¿Qué pasaría si existiera la certeza de un castigo para quien da o recibe un soborno?, ¿qué pasaría si no tuviéramos la sensación de que la justicia se ajusta al bolsillo del implicado?, ¿qué tal si existieran recompensas a la transparencia, la legalidad, el buen desempeño? Las instituciones no se construyen en un día y existe una inercia en todo problema social. Sin embargo, no es una opción sentarse a la orilla del camino y pensar que no hay una posible solución a la corrupción en México.

Es necesario que se construya una conciencia de que las leyes existen para el bien común —o así debería ser—. Una ley que no se cumple, ni por parte de los ciudadanos, ni por parte del Estado, es una mala broma y nada más. La certidumbre jurídica genera incentivos para que la sociedad funcione armónicamente si las leyes son justas o para que se cambien si no lo son. Es difícil imaginar que la vida en México mejore sin que se logre un avance en este sentido.

La sociedad civil debe empujar para combatir la corrupción. Se debe exigir que la justicia no sea una mercancía. Se debe monitorear que el gobierno rinda cuentas por cada centavo y cada decisión que ejerza en nombre de la sociedad. Se deben evidenciar los actos corruptos, grandes y pequeños, que se logren detectar. Se debe pasar del escarnio público a la responsabilidad cuando existe un claro conflicto de interés o un desvío de recursos.

Es importante evitar caer en prácticas corruptas en la vida cotidiana, pero esto no es suficiente para lograr que existan nuevas reglas y construir una mejor sociedad. Hace falta encontrar formas de organización para defender los derechos de cada persona. Cuando el gobierno tenga interés en rendir cuentas, se deben aprovechar y apoyar las iniciativas, pero no es viable esperar a que los cambios lleguen desde arriba o que sucedan mientras cada uno se comporta apropiadamente en su ámbito privado y nada más. Es necesario presionar a los políticos en estos temas.

Por una parte, hace falta organización. Muchos deben ser los ciudadanos que se indignan ante los actos corruptos. La atomización de la vida social deja la indignación en un estadio privado que no desemboca en una acción colectiva que pueda generar un cambio mayor. La construcción de asociaciones y grupos con motivaciones comunes contra la corrupción es indispensable para atacar el problema. La articulación de las organizaciones existentes y aquellas que surjan es también muy relevante para lograr que se asuman las demandas como legítimas y generalizadas.

Otro método que ha probado también cierta efectividad es la difusión de información. El trabajo periodístico autónomo es una herramienta forzosa para la construcción de una democracia y, en particular, para fungir como un contrapeso al poder. Los escándalos de la corrupción en México han salido a la luz gracias al trabajo de periodistas comprometidos y valientes. Es necesario que se promuevan los medios libres y se defiendan a los comunicadores que están dispuestos a evidenciar la corrupción. Es indispensable que se aseguren los derechos de los periodistas y que su profesión deje de ser peligrosa en este país.

La presión para cambiar las leyes y las formas de hacer política en México puede venir de muy diversos ámbitos. Desde la sociedad civil organizada con propuestas especializadas, con cabildeo para cambios legales, con evaluación de los programas de gobierno. Desde el ciudadano “de a pie” que participa activamente en la vida política, razona su voto, exige a sus represen-

tantes, se mantiene informado. El punto es que se vaya creando una conciencia de que la corrupción no será tolerada en ningún nivel o forma en que se presente.

La corrupción es ciertamente un problema complejo, pero no imbatible. Su combate es uno de los muchos retos que enfrenta México para llegar a ser una democracia funcional. Aunque resulte complicado y, seguramente, no existan soluciones instantáneas, la lucha vale la pena porque se podrían evitar muchos de los problemas que la corrupción causa a nivel económico, político y social. El cambio difícilmente vendrá como un regalo de aquellos que se benefician de la impunidad, es necesario que los ciudadanos participen activamente en dismantelar un sistema que sólo perjudica a la mayoría.